

OMC: ¿Los intereses empresariales prevalecerán sobre la conservación de los bosques?

World Rainforest Movement

Cuando tuvo lugar la Cumbre de la Tierra de 1992, parecía que los gobiernos finalmente habían reconocido que el ambiente a nivel mundial se encontraba en problemas y que había que hacer algo para salvarlo. Se elaboró y aprobó un número de importantes convenciones en relación con la biodiversidad, la desertificación y el cambio climático, en tanto el tema conservación de bosques fue tomado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable. Si bien los intereses económicos estaban presentes en todos esos procesos, parecían encontrarse en un relativo equilibrio con las preocupaciones de carácter ambiental.

En lo que respecta a los bosques la OMC (Organización Mundial de Comercio) se ha transformado en el escenario elegido para proteger los intereses de las corporaciones amenazadas por las regulaciones ambientales. Algunas pocas pero poderosas empresas se las han arreglado para incluir allí su propia agenda, a través de algunos pocos pero poderosos gobiernos. Su mensaje es claro: si la protección de los bosques implica menos ganancias, entonces debe ser declarada ilegal. Los intereses de las multinacionales deben prevalecer y la legislación nacional e internacional vigente debe ser considerada como contraria al «libre» comercio y el país que la aplique estará sujeto a represalias.

La agenda de las corporaciones incluye la eliminación de una serie de «barreras al comercio» de productos forestales. Las denominadas barreras son instrumentos que los países utilizan tanto para proteger su economía como su ambiente, o ambos a la vez. Por ejemplo, los impuestos sobre las importaciones y exportaciones aumentan los precios de los productos forestales, llevando de ese modo a un menor consumo. Si bien esto es claramente insuficiente para abordar el problema de los actuales patrones de consumo excesivo, es bueno para los bosques y malo para las empresas. Por lo tanto, las mismas están proponiendo mayores reducciones en los impuestos aduaneros sobre productos forestales.

Existen también una serie de medidas que los gobiernos utilizan para proteger los bosques, como el establecimiento de cuotas para la importación y la exportación, o incluso la veda a la exportación de madera rolliza, todo lo cual contribuye a disminuir la tala. Estas medidas son también buenas para los bosques y malas para las corporaciones. Su propuesta es entonces considerarlas como «barreras no tarifarias» contra el libre comercio y, por lo tanto, prohibirlas. Incluso la certificación y la legislación que exige el reciclado o la recuperación de desechos podrían ser vistas como barreras al libre comercio y ser consideradas ilegales.

Todos estos temas —y muchos otros— serán puestos sobre la mesa en la conferencia ministerial que tendrá lugar en Seattle, EE UU, en medio de la fuerte oposición de miles de representantes de la sociedad civil provenientes de todo el mundo, quienes asistirán a la misma para hacer oír su voz. La lucha no será contra el comercio en sí mismo, sino contra la prevalencia de los intereses de las grandes empresas sobre los intereses de los pueblos y su ambiente. La gente y la naturaleza no son meros «recursos» para lograr ganancias sin considerar las consecuencias que ello implica para el ambiente a nivel local y global. Los bosques no son meros depósitos de madera a la espera de ser cortada para aumentar la rentabilidad de las corporaciones. Ellos son, en cambio, el hogar de muchos seres humanos, el hábitat de innumerables especies vegetales y animales, un elemento crucial para la estabilidad del clima, para asegurar el suministro de agua, para la conservación de los suelos. Por lo tanto su conservación debe prevalecer sobre los beneficios económicos de las corporaciones. Este es el mensaje que sonará fuera de los lugares de reunión y en las calles de Seattle. Los delegados gubernamentales tendrán que escuchar —les guste o no— la voz de los pueblos. Es el futuro de la humanidad que está en juego y ellos deberán definir que intereses defienden: los de sus propios pueblos y su ambiente o los de las grandes empresas y la consiguiente destrucción ambiental.

BRASIL

EL PARQUE NACIONAL MONTE PASCOAL PERTENECE A LOS PATAOXO

Cuando los conquistadores europeos llegaron a América hicieron una clara distinción entre los blancos, los negros y los indígenas. Mientras que los primeros fueron considerados seres humanos, los esclavos africanos fueron declarados animales. Si bien los indígenas fueron declarados humanos, fueron considerados como niños cuyas vidas debían ser gobernadas por los adultos, vale decir por aquéllos de descendencia europea.

Hoy en día nadie apoyaría abiertamente esta clasificación. Sin embargo de hecho esta forma de pensar esta lejos de haber desaparecido. El caso del pueblo indígena Pataxo en el estado de Bahía, Brasil, constituye uno de los muchos posibles ejemplos. A ellos les fue quitado completamente su territorio en 1951 —luego de la masacre de la mayor parte de su pueblo— y gran parte del mismo fue declarado Parque Nacional, al tiempo que el resto fue distribuido entre los ganaderos. El 19 de agosto de 1999, los Pataxo decidieron recuperar sus territorios tradicionales y tomaron el Parque Nacional Monte Pascoal (ver Boletín 26 del WRM). La sociedad brasileña reaccionó de diversas maneras. Algunas relativamente pocas organizaciones e individuos expresaron su incondicional apoyo a dicha acción, basados en el sencillo hecho que los Pataxo son los dueños por derecho del Parque. Una gran parte de la población optó por oponerse, por ignorar o por apoyar condicionalmente la acción. La explicación de esta reacción puede encontrarse en el profundo racismo que todavía prevalece en relación con los pueblos indígenas. Aun algunas organizaciones bien dispuestas hacia el tema de los pueblos indígenas parecen desconfiar de la capacidad de los Pataxo para conservar el parque. Aparentemente la conservación de éste es para ellos mas importante que la justicia. Lo que es más importante: parecen seguir viendo a los Pataxo como niños que necesitan ser guiados por los adultos. ¿No es esto racismo?

En un país destructor de sus bosques, como es Brasil, nadie puede culpar a los indígenas por haber sido protagonistas en este sentido. Por el contrario, ellos han sufrido los impactos, viendo sus vidas y medios de subsistencia gravemente afectados por la deforestación y la degradación de los bosques. El hecho de que Monte Pascoal —parte del territorio de los Pataxo— todavía tenía grandes superficies de bosque cuando fue declarado tal, constituye una prueba de ello. Pero ahora muchos están preocupados de que en manos de los «indios» ahora el Parque puede ser destruido. Esto requiere de dos aclaraciones. Por un lado, debe señalarse que los Pataxo —dueños por derecho de esas tierras— poseen los mismos derechos legales que otros brasileños tienen a cortar los bosques. Por otro lado, los Pataxo han declarado que es su propósito conservar el bosque, de modo que no hay razón para creer que no actuarán de acuerdo con esa intención.

Monte Pascoal significa mucho para los Pataxo: significa la recuperación de su territorio ancestral y la posibilidad de lograr nuevamente su dignidad como pueblo. El Parque también significa mucho para los conservacionistas, que lo consideran uno de los pocos remanentes de la prácticamente desaparecida Mata Atlántica. Asimismo, el Parque es un símbolo del «descubrimiento» del Brasil por parte de los portugueses hace 500 años. De modo que los Pataxo han puesto sobre la mesa temas cruciales a ser abordados por el conjunto de la sociedad brasileña: justicia; igualdad entre indígenas y otros pueblos; la conservación y la gente; «descubrimiento», encuentro o conquista; racismo; genocidio.

Los Pataxo necesitarán mucho apoyo a nivel internacional, nacional y local. Ellos están enfrentando un gran numero de fuerzas y habrán de utilizar todos los medios posibles para derrotarlos. Por ejemplo, recientemente el gobierno dejó de asignar fondos al grupo de trabajo de la propia agencia oficial a la que se había asignado la tarea de demarcar el territorio de los Pataxo. Le concedió tierras a campesinos sin tierra en el territorio Pataxo, con el fin de generar conflictos entre ambos grupos. Los ganaderos que ocupan predios alrededor del Parque son responsables de incendios anuales, que inevitablemente afectarán al

mismo, tal como ha sucedido en el pasado. El gobierno puede decidir no brindar apoyo para combatir los incendios, con el propósito de mostrar la supuesta incapacidad de los Pataxo para preservar el bosque.

Éste no es un tema de conservación versus destrucción. Es cuestión de reparar una injusticia y de reconocer el derecho de los Pataxo a manejar su territorio. Ellos están realizando un llamado a organizaciones, la Iglesia, parlamentarios, organismos municipales, estatales y federales, y a individuos preocupados, en busca de ayuda para «construir el futuro de nuestro pueblo en nuestro territorio tradicional... que es el único lugar posible donde construir nuestro futuro con dignidad».

Quienes deseen apoyar la lucha de los Pataxo pueden ponerse en comunicación con ellos a través de CIMI-Equipe Extremo Sul, por el correo electrónico: cimi@sulbanet.com.br

CAMPAÑA SOBRE PLANTACIONES

CERTIFICACIÓN DEL FSC PARA ARACRUZ SUSPENDIDA

La noticia de que el gigante de la pulpa blanqueada de eucalipto Aracruz Celulose había solicitado la certificación del FSC provocó una conmoción en los dos estados brasileños —Bahía y Espírito Santo— donde opera. Como consecuencia, un gran número de organizaciones e individuos preocupados por la expansión de los monocultivos forestales en la región —comprendidos los de Aracruz, los de Bahía Sul y los de Veracel— se unieron para evitar que esa compañía recibiera la aprobación del FSC.

Las actividades conjuntas y coordinadas de las organizaciones involucradas culminaron en un seminario que tuvo lugar en Vitoria, Espírito Santo, los días 15 y 16 de octubre pasados. Entre los participantes se contaban representantes de organizaciones de pueblos indígenas, ONG, sindicatos, pescadores, académicos, comunidades afrobrasileñas, periodistas, parlamentarios, etc. En el seminario se analizaron los impactos de las actividades de Aracruz en el marco de los principios y criterios del FSC y se acordó participar activamente del proceso de consulta que se estaba implementando por parte de la firma certificadora SCS. Dado que SCS no ha cumplido con una serie de requerimientos establecidos por el FSC respecto de la participación y la consulta, los participantes del encuentro decidieron enviar una carta pidiendo la postergación de los encuentros de consulta. Dicha carta (disponible en idioma inglés en: <http://www.wrm.org.uy/english/plantations/material/Aracruz/report1.htm>), fue enviada el 22 de octubre y hasta el día de hoy (16 de noviembre) no se había recibido ninguna respuesta. Ahora FSC-Brasil informa que el proceso de certificación ha sido por el momento suspendido debido a deficiencias en el proceso denunciadas por organizaciones de la sociedad civil.

Al mismo tiempo el «acuerdo» impuesto por Aracruz a los Tupinikim y Guarani en Espírito Santo ha empezado a ser cuestionado. El 11 de noviembre pasado se realizó una manifestación indígena frente a la fábrica para expresar su disconformidad. Alrededor de 500 indígenas, entre los cuales mujeres, hombres y niños provenientes de los poblados de Caieiras Velhas, Pau Brasil, Irajá, Boa Esperança y Três Palmeiras participaron de la manifestación. La misma contó con el apoyo de representantes de la CUT (Central Única de Trabajadores), el MST (Movimento dos Sem-Terra) y del PT (Partido de los Trabajadores). Los indígenas rechazaron la acusación de la empresa de que ellos estaban cambiando tierras por dinero y repudiaron la actitud arrogante de la misma, que se negó a recibirlos.

A pesar del enorme poder que ostenta, Aracruz se encuentra en una posición débil. Conociendo su trayectoria en lo que

respecta a los pueblos indígenas, la empresa esta tratando de conseguir la certificación del FSC sólo para sus plantaciones en Bahía, evitando de esta manera el espinoso tema del despojo de tierras a los pueblos indígenas en el estado vecino de Espírito Santo. Pero aun en Bahía se ha demostrado que los impactos de las plantaciones son tan grandes que es muy improbable que consiga la certificación. La credibilidad del propio FSC esta en juego en este proceso de certificación. En caso de que eventualmente Aracruz fuera certificada, la mayoría de las ONG que participan del FSC seguramente se retirarían, de modo que la organización perdería el apoyo que necesita para seguir teniendo credibilidad.

LAS PLANTACIONES FORESTALES GENERAN DESEMPLEO

Uno de los argumentos utilizados por los promotores de las plantaciones forestales en gran escala (encabezados por la industria de la pulpa y del papel) es que las mismas contribuyen al bienestar de las zonas rurales donde se instalan, aumentando las oportunidades de empleo. Esta cuestión es crucial: como sabemos, el desempleo es una de las consecuencias más negativas del actual proceso de globalización, de modo que toda actividad que prometa aumentar los puestos de trabajo puede ser percibida como atractiva por parte de la población local. En el caso de las plantaciones, sin embargo, lo que se ha comprobado es lo contrario. Un ejemplo de ello es lo que sucede en la región extremo sur del estado de Bahía, en Brasil, donde las comunidades locales están oponiéndose activamente a las plantaciones.

Antes de que se comenzaran a instalar las plantaciones, en esa región se realizó una encuesta para conocer que opinaban diversos sectores de la sociedad acerca de la ejecución de un plan de desarrollo basado en la industria de la pulpa y del papel. En ese entonces, el 45% de los entrevistados se manifestaron favorables a tal iniciativa, siendo la generación de empleo uno de los argumentos más utilizados para fundamentar ese apoyo. Hoy en día, luego que tres grandes empresas (Aracruz Celulose, Bahía Sul Celulose y Veracel) se han adueñado de grandes superficies de tierra y las han plantado con eucalipto, otro es el pensar de la gente.

Un estudio comparativo de los puestos de trabajo generados por la ganadería, la agricultura industrial, la agricultura de pequeña escala y las plantaciones de eucalipto, muestra que la primera actividad emplea un promedio de un trabajador cada 50 hectáreas; la primera y segunda consideradas en conjunto, emplean un trabajador cada 26,1 hectáreas, mientras que en la agricultura de pequeña escala trabaja una persona cada 5 hectáreas. Las plantaciones de eucalipto generan solamente un puesto de trabajo cada 60 hectáreas. Este número resulta de dividir el total de 371.156 hectáreas pertenecientes a dichas empresas, entre los 6.212 empleos que generaron.

Pero esto no es todo. Comparando el número de puestos de trabajo generados por dichas compañías con los puestos perdidos en la ganadería y la agricultura en las tierras donde se instalaron las plantaciones —50.000 hectáreas antes usadas en agricultura, 271.000 hectáreas para ganadería y 50.000 sin uso directo— el resultado es todavía peor: ¡se perdieron 15.420 puestos de trabajo! Ello significa que por cada puesto generado por la industria de la pulpa y del papel en la región, 2,5 se perdieron. En resumen, si la generación de empleo es una prioridad, las plantaciones no solamente constituyen la peor solución, sino que agravan el problema al provocar más desempleo.

Fuentes: José Koopmans, Alem do eucalipto: o papel do Extremo Sul, Memorial das Letras, Salvador, 1999; Carrere, Ricardo, Diez respuestas a diez mentiras, World Rainforest Movement, Montevideo, 1999.

CRIMEN AMBIENTAL VINCULADO A PEUGEOT EN BRASIL

La empresa francesa de automóviles Peugeot «preocupada por el ambiente» decidió hacer algo en relación con el efecto sobre el calentamiento global que tienen los millones de autos que ella produce. Por supuesto que nada radical, como por ejemplo, cambiar hacia nuevos tipos de combustible. En cambio, la empresa decidió tomar por el atajo y plantar árboles para «secuestrar carbono» en el estado de Mato Grosso en Brasil. El proyecto comenzó a ser implementado el año pasado, con la finalidad de convertir 12.000 hectáreas de pasturas «degradadas» en plantaciones. Según Peugeot, el área plantada será capaz de extraer 183.000 toneladas de dióxido de carbono por año de la atmósfera. Y además muy barato: por sólo 12 millones de dólares.

Sin embargo, las consecuencias han sido muy caras para el ambiente y la población local. Cuando una subsidiaria de la ONG francesa «Office Nations des Forêts» comenzó las actividades de plantación, provocó lo que puede ser catalogado como el mayor delito ambiental cometido en el estado. Cientos de animales —algunos de ellos pertenecientes a especies en peligro de extinción— fueron encontrados muertos en una de las zonas de plantación. La razón: el uso de 5.000 litros del «inocuo» herbicida glifosato (Round Up) en una superficie de 1.500 hectáreas como preparación previa a la plantación. El desastre alcanzó incluso a dos ríos (el Juruema y el Teles Pires) provocando una masiva mortandad de peces.

Lo peor es que no se trató de un simple accidente. Por el contrario, la moderna tecnología de las plantaciones recomienda el uso de herbicidas para eliminar la competencia de la vegetación, lo que de hecho elimina la mayor parte de la biodiversidad botánica previamente existente. El herbicida que se está usando en todo el mundo con este propósito, sobre cuyos efectos la compañía que lo produce (Monsanto) ha mentido sistemáticamente durante años al señalar que es más inocuo que la sal de mesa, es precisamente el mismo que causó este desastre.

Esta situación es el resultado de un engañoso ambientalismo, vale decir, la implantación de una actividad supuestamente «beneficiosa para el ambiente» —plantar árboles— publicitada como adecuada para secuestrar dióxido de carbono y, por lo tanto, para mitigar el efecto invernadero. Para evitar la difícil decisión de abandonar una economía dependiente del petróleo, parte de la comunidad académica ha inventado esta supuesta solución y la ha dotado de un barniz «científico». Afortunadamente, otra parte de la comunidad académica parece estar honestamente tratando de determinar si las plantaciones son o no son capaces de actuar como sumideros de carbono. Su respuesta ha sido que no.

Fuente: Nelson Francisco, «Herbicida pode ter causado desastre ambiental. Centenas de animais selvagens foram encontrados mortos em fazenda de MT», O Estado de S. Paulo, 11/11/1999

NUEVAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS: PLANTACIONES FORESTALES PUEDEN ACELERAR CAMBIO CLIMÁTICO

La promoción de las plantaciones forestales como medida para combatir el calentamiento global ha recibido todo tipo de críticas. Por un lado, que las plantaciones no alivian la presión de uso sobre los bosques, que son reservorios de carbono, sino que constituyen una causa directa de su destrucción. De acuerdo con un análisis de imágenes satelitales, durante los años ochenta, el 75% de las nuevas plantaciones en países tropicales fue realizado por sustitución de los bosques existentes diez años antes. Ello significó un incremento adicional de la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera del orden de 725 millones de toneladas, colaborando de ese modo al calentamiento global (ver Boletín 18 del WRM). Por otro lado, cuando se instalan plantaciones sobre pradera se está sustituyendo un valioso ecosistema en lo que respecta a su función de sumidero y reservorio de carbono. La cantidad de carbono almacenado por las praderas debería ser deducida del volumen total de carbono que

supuestamente retienen las plantaciones. Lo que es más, en algunos casos —como sucede con la vegetación herbácea de los páramos andinos— según recientes estudios los ecosistemas naturales son más eficientes que las plantaciones en cuanto a la capacidad de absorber CO₂. Por último, pero no por ello menos importante, la promoción de los monocultivos en gran escala, bajo el disfraz de «sumideros de carbono», no hará sino agravar los negativos impactos desde el punto de vista social y ambiental que similares plantaciones —en ese caso, para la producción de fibra y madera— provocan.

Recientemente, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) publicó un informe que puede significar el golpe de gracia para la idea de las plantaciones como sumideros de carbono. De acuerdo con los científicos, las plantaciones planeadas se saturarán de carbono rápidamente y comenzarán a devolver la mayor parte del carbono a la atmósfera a través de la respiración. Dado que el CO₂ es el más importante gas de efecto invernadero, el calentamiento global no se mitigará, sino que se acelerará. Estos resultados señalan un cambio en el punto de vista que el IPCC tenía anteriormente respecto del tema. Se suponía que en tanto los niveles de CO₂ atmosférico fueran creciendo, el sumidero ofrecido por los árboles seguirá aumentando debido al efecto de aceleración de la fotosíntesis, que tiene la denominada «fertilización con CO₂». Sin embargo la fertilización con CO₂ puede ya haber alcanzado su máximo nivel y la respiración puede estar por acelerarse. En consecuencia las plantaciones forestales en gran escala de hecho agravarían —en lugar de mitigar— el efecto invernadero.

Lo anterior prueba que la plantación de árboles para absorber CO₂ no sustituye la necesidad de disminuir las emisiones de combustibles fósiles en la fuente y mucho menos la necesidad de repensar el actual modelo insustentable de producción y consumo, que constituye una amenaza para la vida en la Tierra. A pesar de los esfuerzos que están desplegando sus promotores para mostrarlas como la panacea, las plantaciones no son una solución para el problema, sino una parte de él.

Fuente: <http://www.newscientist.com/ns/19991023/newsstory8.html>

BOLIVIA GASODUCTO A CUIABÁ

DESCUBREN ESCANDALOSO NEGOCIADO DE «CONSERVACIONISTAS»

A nombre de la naturaleza, su defensa y conservación, cinco organizaciones, mal llamadas «conservacionistas», como World Wildlife Found (WWF), Word Conservation Society (WCS), el Missouri Botanical Garden, la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y el Museo Noel Kempff Mercado, hicieron una megajugada al país al firmar, a ocultas del pueblo boliviano, un protocolo en que prometen apoyar la aprobación de la construcción del gasoducto a Cuiabá a cambio de 20 millones de dólares para proyectos de «conservación». El protocolo fue interceptado y está circulando a nivel nacional e internacional.

A continuación se transcribe un Pronunciamiento de denuncia de varias organizaciones de la sociedad civil boliviana en torno a esta mala jugada que dio lugar a la aprobación última del gasoducto a Cuiabá (comentada en nuestro Boletín no 2).

Estos días habrá varias reuniones —en Santa Cruz y en Taperas, base de operaciones de ENRON— convocadas principalmente por el Comité de Defensa de los Recursos Naturales de la Gran Chiquitanía con el fin de analizar la situación y

proponer alternativas dignas y sostenibles. Solicitamos a nuestros lectores dar la máxima difusión posible al siguiente documento.

PRONUNCIAMIENTO A LA OPINION PÚBLICA

Los H. Alcaldes, Comités Cívicos, Comités de Fiscalización de las Provincias Angel Sandoval, Chiquitos y Germán Busch, la Organización Indígena Chiquitana, el Foro Regional de Medio Ambiente y Desarrollo de la Provincia Germán Busch, el Foro Departamental de Medio Ambiente y Desarrollo de Santa Cruz, el Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo y PROBIOMA, reunidos en el Taller sobre Implicancias Sociales, Económicas y Ambientales de la construcción del Gasoducto a Cuiabá y luego del análisis del proceso que está siguiendo la aprobación de la ejecución de dicho proyecto hacemos conocer a la opinión pública y autoridades involucradas, lo siguiente:

El desarrollo regional y nacional es un imperativo y una necesidad para nuestros pueblos que continuamente han sido postergados en sus aspiraciones socioeconómicas. Siendo que nuestra región cuenta con ricos recursos naturales, los mismos que tradicionalmente han sido resguardados por las poblaciones locales y pueblos indígenas, como es el caso del bosque Chiquitano, El Pantanal, el Parque Nacional de Otuquis, los humedales del Área Natural de Manejo Integrado de San Matías, etc., observamos hoy con mucha preocupación la planificación y ejecución en la región de grandes megaproyectos energéticos, de integración, etc., que bajo el supuesto de un desarrollo nacional, no está beneficiando a nuestra región, sino al contrario están significando un grave impacto en nuestros recursos naturales y son motivo de negociados de instituciones ajenas a nuestra realidad, que bajo el pretexto de conservación del medio ambiente, están vendiendo nuestros bosques. Tal es el caso de la construcción del Gasoducto Bolivia-Brasil (próximo a entrar en funcionamiento), y ahora el inicio de la construcción del Gasoducto Lateral a Cuiabá.

El Gasoducto a Cuiabá, cuyos auspiciadores son las empresas ENRON y SHELL, ha tenido desde su planificación, una serie de anomalías, entre las que podemos mencionar las siguientes: El trazado original para la construcción del Gasoducto ha sido diseñado para atravesar el último bosque seco del mundo, el bosque Chiquitano, de importancia mundial por su estado de conservación y por los impactos negativos que generará en el frágil ecosistema y en la rica biodiversidad de la región.

El estudio de impacto ambiental elaborado por la empresa ENTRIX y PCA, y que pretendía justificar dicho trazado, fue observado por nuestras organizaciones por deficiente, razón por la cual se realizó un estudio suplementario, que no ha sido de conocimiento de nuestras organizaciones a pesar de haber solicitado dicho estudio para nuestro análisis, en fecha 28 de mayo del presente año.

Varios estudios científicos han clasificado a la región como «bosque primario tropical», sin embargo la ENRON la clasificó como bosque secundario, pretendiendo minimizar de esta manera los impactos negativos directos sobre este frágil ecosistema que abarca 6 millones de has.

A lo anterior debemos añadir que el proceso de consulta a las poblaciones locales fue insuficiente y no abarcó a todas las existentes en la región, además de existir falta de información en lo referente al estudio de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, planes de mitigación ambiental, etc.

Con estos antecedentes, expresamos nuestra oposición a la construcción del Gasoducto por el trazado originalmente planteado por la ENRON y recomendamos una ruta alternativa, que no altere dicho ecosistema, además de nuestras observaciones técnicas al EIA.

A pesar de ello, los organismos gubernamentales pertinentes, otorgaron la licencia ambiental el 21 de mayo, sin que la ENRON haya respondido a nuestras observaciones.

Ante esta situación, apelamos a los financiadores de este proyecto (OPIC), institución descentralizada del gobierno de los EE UU, a fin de que no otorgue el financiamiento a la ENRON, en tanto y en cuanto no cambie la ruta del trazado y responda a nuestros cuestionamientos.

En este proceso, Organizaciones Ambientalistas del mundo se unieron a nuestros cuestionamientos y preocupaciones. Pero observamos que, mientras se daba este proceso, algunas organizaciones conservacionistas de los EE UU y de Bolivia: World Wildlife Found (WWF), Word Conservation Society (WCS), el Missouri Botanical Garden, la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y el Museo Noel Kempff Mercado; a tiempo de unirse a nuestros esfuerzos de oposición al trazado original del proyecto, entablaban negociaciones paralelas con los promotores del proyecto, para dar su aval a CAMBIO DE DINERO, convirtiendo los esfuerzos nuestros en ventajas para su negociación. Las negociaciones entre la ENRON, SHELL, Transredes y Gas Oriente Boliviano con estas cinco instituciones, concluyeron con el compromiso de otorgar a las mismas un fondo de 20 millones de dólares para un plan de conservación.

Las poblaciones locales y los pueblos indígenas somos responsables del estado de conservación del área, así como dueños de los recursos naturales de la región, por lo tanto nos corresponde a nosotros, las poblaciones locales y sus organizaciones, definir y decidir acerca de los proyectos que se pretenden implementar en la región, y no a cinco instituciones conservacionistas que se abogan el derecho de «vender» nuestros recursos naturales para su beneficio propio.

¿Con qué respaldo legal se han atrevido a negociar nuestros recursos naturales? ¿Acaso los han cuidado y conservado? ¿Viven en la región? Nadie los conoce. Por otra parte ¿son compensables los impactos ambientales? ¿Se puede poner un precio a la destrucción de las últimas reservas naturales que existen en el Planeta, que en este caso pertenecen a Bolivia y a nuestra región?

El negocio de estas cinco instituciones conservacionistas, conducidas por el Sr. Timothy Killeen (Missouri Botanical Garden), se realizó a espaldas del país y no solamente carece de ética, sino que viola todo principio del derecho de los pueblos a definir sobre sus recursos. Consideramos que la opinión pública y las autoridades gubernamentales deben conocer acerca de este atropello efectuado por estas cinco instituciones que no representan a nadie, así como el tema de negociaciones por compensación ambiental. Consideramos que ha llegado la hora de frenar a quienes hacen uso del medio ambiente como una forma de lucro.

Por lo anterior y en uso de nuestros derechos, como instituciones y organizaciones representativas de la región y en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley de Medio Ambiente No. 1333, exigimos lo siguiente:

Que los 20 millones de dólares negociados a nombre de nuestros recursos naturales por estas cinco instituciones sean entregados en su totalidad a la mancomunidad de municipios de la gran Chiquitanía, Comités Cívicos, Comités de Fiscalización y Organizaciones de base, para la creación de un Fondo de Desarrollo y Gestión Ambiental que permita la ejecución de proyectos requeridos prioritariamente en la región, según las necesidades de las poblaciones locales, tal como fue la experiencia con el Gasoducto Bolivia-Brasil; y que sea una base para que las poblaciones hagan un manejo sostenible y ejerzan fiscalización de sus recursos naturales.

Que se cambie el trazado de la construcción del gasoducto por la ruta alternativa planteada por nosotros, es decir: San José de Chiquitos, San Rafael, Ascensión (cerca de la frontera, al este de Las Petas), San Lorenzo, Las Petas y San Matías.

En base a los antecedentes expuestos, el gobierno boliviano, debe suspender la licencia ambiental a la ENRON y exigir la entrega del estudio suplementario de impacto ambiental a nuestras organizaciones, además de iniciar un nuevo y legítimo proceso de consulta con todas las poblaciones locales afectadas por este proyecto, a fin de analizar los planes de manejo ambiental y de mitigación ambiental, y elaborar con nuestras organizaciones e instituciones un plan de desarrollo y gestión ambiental para la región. Declaramos personas no gratas para la región a los representantes de las cinco instituciones conservacionistas, por su actitud carente de ética y de compromiso regional y nacional.

Mientras estas legítimas demandas no hayan sido satisfechas, no permitiremos la construcción de dicho gasoducto.

Es dado en la ciudad de Santa Cruz, a los 28 días del mes de junio de 1999. Los representantes de las organizaciones e instituciones presentes en dicha reunión expresamos nuestra conformidad con la presente Declaración y firmamos al pie del presente Pronunciamiento.

BOLIVIA

BUENAS NOTICIAS SOBRE LOS BOSQUES DE CHIQUITANO

Desde 1998 ONG ambientalistas y sociales bolivianas e internacionales, así como representantes del sector académico, se han venido oponiendo al proyecto de construcción del gasoducto San Miguel-Cuiaba por parte de Enron-Shell. El mismo atravesara los territorios de Bolivia y Brasil, provocando un impacto ambiental negativo sobre el bosque tropical seco de Chiquitano en Bolivia. El mismo es el último remanente significativo en el mundo de bosque tropical seco primario. A pesar de la señalada oposición, en junio de 1999 OPIC (Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero) —una institución financiera descentralizada del gobierno de Estados Unidos— decidió dar su apoyo financiero al proyecto. Tal decisión fue tomada, según aduce OPIC, debido a que algunas organizaciones conservacionistas bolivianas, estadounidenses e internacionales habían negociado con los promotores del proyecto su apoyo al mismo si se implementaba un Plan de Conservación. Esta sorprendente actitud fue severamente cuestionada por varias ONG bolivianas de defensa del medio ambiente y de los derechos humanos (ver Boletín 24 del WRM).

Por fortuna, algunas de esas ONG parecen haberse dado cuenta del error y recientemente WWF anunció que no seguiría apoyando el mencionado Plan de Conservación. Tal decisión es el resultado directo del trabajo de las ONG que han mostrado su preocupación por el asunto, y que se oponen al «maquillaje verde» con que se estaba intentando disimular este insustentable proyecto de infraestructura. Es de esperar que el nuevo enfoque de WWF respecto del tema colabore a convencer a la OPIC para que cambie su posición sobre el financiamiento del proyecto.

Fuente. Drillbits & Tailings (versión en castellano), 4-15, 25/9/99.

COLOMBIA

VIOLENCIA Y DEFORESTACIÓN EN LA REGIÓN DEL CHOCO

Los bosques de Colombia están sufriendo un severo proceso de destrucción. La guerra civil que esta devastando el país puede ser considerada una de las principales causas de ese fenómeno. Debido al prevaleciente estado de violencia en Colombia, comunidades rurales enteras se han visto obligadas a dejar sus hogares y tierras. Además de sus efectos desde el punto de vista social y cultural, los desplazamientos forzosos también generan condiciones para ulteriores impactos negativos sobre los bosques.

La región del Pacífico del país, conocida por su abundancia de recursos naturales y su riqueza cultural, así como por el constante proceso de depredación que la ha afectado desde tiempos de la Colonia (ver Boletín 27 del WRM) es víctima de este tipo de actividades. Las comunidades afrocolombianas forzosamente desplazadas de la cuenca del Cacarica en el Chocó, provisionalmente asentadas en Turbo, Bocas del Atrato y Bahía Cupica, han denunciado la deforestación ilegal e indiscriminada de sus territorios por parte de la empresa YIREH. La misma aparentemente esta operando en conexión con la compañía maderera Maderas de El Darien.

En tanto las comunidades se resisten a regresar a sus tierras hasta que el gobierno colombiano satisfaga las condiciones para lo que ellas denominan un «retorno con dignidad», la mencionada compañía esta sacando ventaja de su ausencia para practicar cortas en los territorios legalmente reconocidos a las comunidades de acuerdo con la Ley nº 70 para las Comunidades Étnicas Negras. Lo que es más, las comunidades han denunciado acciones de hostilidad por parte de los paramilitares, que están tratando de intimidarlos para que cesen en su oposición a tales actividades de corta. Es importante mencionar que los limites de la cuenca del Cacarica bordean el Parque Nacional Los Katios, que alberga uno de los niveles de biodiversidad por kilómetro cuadrado más altos del mundo.

Del 19 al 21 de agosto pasado una comisión integrada por representantes de las comunidades, ONG nacionales e internacionales, parlamentarios y delegados del gobierno, se dirigieron a la zona de conflicto para investigar el actual proceso de deforestación. He aquí un fragmento del testimonio de las comunidades, publicado en el boletín «Humanos del Mundo»:

«Fuimos testigos, junto a representantes del gobierno y de instituciones del estado, del horrendo escenario de deforestación que Maderas de El Darien esta generando en la región del Cacarica. Frente a nuestros propios ojos pasaron dos botes — pertenecientes a la empresa— remolcando más de 300 rolos obtenidos de árboles pertenecientes a especies en peligro del catival. Oímos el ruido de maquinaria de alta tecnología que no se hunde en suelos pantanosos; vimos como seguían abriendo canales para sacar nuestro patrimonio; nos pusimos tristes al comprobar la ocupación del local de nuestra escuela, que ahora se transformó en campamento de los madereros. No estamos mintiendo: las grandes compañías están transformando nuestro territorio en un cementerio para la naturaleza; ya no caminamos entre los árboles, sino con el sol pegándonos en la frente. Esto es un ecocidio».

De acuerdo con testimonios obtenidos de trabajadores de la empresa, CODECHOCO —la entidad gubernamental a cargo de otorgar las concesiones de corta en la región— está advertida de esta deforestación ilegal, pero no ha hecho nada para frenarla. Esta omisión y negligencia están ayudando a que la destrucción masiva de la selva continúe.

Se ha iniciado una acción a nivel internacional para frenar esta destrucción. Ud. puede dirigirse a las siguientes autoridades colombianas, expresando su preocupación por esta acelerada deforestación y por el sufrimiento que padecen las comunidades de la Cuenca del Cacarica, y demandando que se ponga fin de inmediato a todos los contratos de maderero en el área:

Sr. Presidente
Dr Andres Pastrana Arango
Fax: (011-571) 283-7324
(011-571) 286-7434
(011-571) 287-7937

Sr. Ministro de Medio Ambiente
Dr. Juan Mayr
Fax: (011-571) 288-7639

Fuente. Colombia Support Network, 12/10/00, correo electronico: csn@igc.apc.org <http://www.igc.apc.org/csn/>

VENEZUELA

LA LUCHA DE LOS PEMON

El pueblo indígena Pemon se opone al proyecto de construcción de un tendido de alto voltaje de 470 millas de largo a través del Parque Nacional Conaima en la región de la Gran Sabana, al sudeste de Venezuela. A comienzos de octubre llevaron a cabo una acción directa que consistió en derribar una torre eléctrica y en bloquear una carretera clave para la conexión de ese país con el Brasil.

En un comunicado de prensa los Pemon, que se autodenominan «Guerreros del Arcoiris», dijeron que continuarían derribando por lo menos una torre por día, a menos que lleguen a un acuerdo con el gobierno. También informaron que habían detenido tres camiones pertenecientes a entidades estatales, que estaban siendo utilizados para la construcción del tendido.

Algunas ONG ambientalistas están apoyando la lucha de los Pemon, sosteniendo que el tendido habrá de dañar el rico y frágil ecosistema del Parque y perturbar la existencia de las comunidades indígenas. De acuerdo con el punto de vista oficial, la obra es sinónimo de «progreso» para la región, dado que proveerá de energía a las actividades de la minería del oro y a los propios poblados indígenas. Teniendo en cuenta el impacto ambiental de la minería del oro sobre el ambiente en general y sobre los bosques en particular, así como el impacto cultural de este tipo de proyectos en el modo de vida de los indígenas, la construcción del tendido eléctrico por cierto no significa una mejora para las condiciones de vida de los Pemon, y es por ello que estos se están oponiendo rotundamente al mismo. El año pasado tuvo lugar una protesta de características similares, que obligó al gobierno a interrumpir las obras hasta mayo de este año.

A su vez, los pueblos indígenas de Venezuela están participando activamente en el proceso de redacción de la nueva constitución. El 3 de noviembre pasado, los 131 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela votaron la inclusión de un capítulo en la nueva Constitución, por el que se establecen los derechos legales de los pueblos y las comunidades indígenas en ese país, de acuerdo con la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su Capítulo VIII garantiza «el derecho a existir como pueblos y comunidades indígenas, con su propia organización social y económica, sus culturas y tradiciones, y su tierra». El texto completo de la nueva Constitución será sometido a referéndum el próximo 12 de diciembre.

Si, como es de prever, la nueva Constitución es aprobada, los Pemon y otros pueblos indígenas estarán en mucho mejor posicionamiento para proteger su ambiente y sus tradiciones contra las fuerzas destructivas que han prevalecido hasta ahora.

Fuentes: Guillermo Holzmann, correo electrónico: gholz85@yahoo.com 3/10/99; Amazon Watch, correo electrónico: amazon@amazonwatch.org 4/11/99.

TAILANDIA

MÁS PLANTACIONES DE EUCALIPTOS

Dado que el área cubierta de selva ha disminuido notoriamente en Tailandia, las autoridades sostienen que las plantaciones de rápido crecimiento son necesarias para aumentar la cobertura forestal y evitar ulteriores presiones sobre los bosques. No obstante, la realidad demuestra que ambos argumentos son falsos. Por un lado, la fundamental tarea de aumentar la cobertura forestal del país debería ser encarada mediante la reforestación con especies nativas, lo que es completamente distinto de la forestación con eucalipto o cualquier otra exótica. Por otro lado, en Tailandia, al igual que en muchos países del Sur, se han talado enormes superficies de bosques para dar lugar a monocultivos forestales con exóticas, en tanto otras áreas han sido cortadas por gente desplazada de sus propias tierras a causa de las plantaciones. Por lo tanto, las plantaciones no sólo no constituyen un alivio para la presión de uso sobre los bosques, sino una causa directa de deforestación.

En base a su experiencia, los campesinos se oponen a este modelo. La misma muestra que las plantaciones de eucalipto en gran escala desplazan o empobrecen a los campesinos, dado que los eucaliptos permiten muy poco cultivo entre filas, no sirven como forraje, suministran escasa leña, pueden disminuir los niveles de agua en los estanques, pozos y bosques vecinos, y provocan erosión del suelo en lugar de controlarla, como dicen sus promotores. Además, suministran una escasa gama de aquellos productos forestales utilizados por las comunidades rurales para su supervivencia, a la vez que se apropian de tierras de la comunidad. Asimismo, los campesinos encuentran que el trabajo en las plantaciones no es atractivo, puesto que no es ni abundante ni estable.

Como era de esperar, el proyecto ya ha generado protestas a nivel de la sociedad civil. Pornpana Kuaycharoen, de la ONG Foundation for Ecological Recovery, manifestó que las plantaciones dañarían los ecosistemas del país y afectarían las fuentes de agua de los campesinos, tal como sucedió una década atrás. Pakphum Vithantiravat, del Foro de Campesinos del Noreste, apoya este punto de vista y recuerda que muchos campesinos que plantaron eucaliptos cuando se los promovió en 1985 ya los han cortado y han vuelto al cultivo de arroz. Pakphum Withantiwat, consejero del Foro de los Pobres, puntualiza que los eucaliptos no se plantan en tierras áridas, sino en suelos fértiles, para que crezcan más rápido. Asimismo, la Red de Agricultura Alternativa ha expresado su oposición al proyecto, dado que la región este del país tiene suelos con un alto potencial productivo para el arroz, que es mucho más importante que los eucaliptos para los pobladores locales.

No hay duda que el modelo de plantaciones está vinculado con la globalización en curso. En enero de 1999, durante una visita a Japón, el Presidente de China Jiang Zemin recibió una propuesta por parte de la Federación Japonesa de Organizaciones Económicas (Keidanren) para que un grupo de empresas de ese país iniciaran un programa de forestación en China, con la intención de asegurarse un número mayor de cuotas de emisión de dióxido de carbono, bajo los Mecanismos de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto (ver Boletín 20 del WRM). El Sr. Jiang Zemin parece haber aprendido rápidamente la lección y ahora es el quien propone que Tailandia implemente un proyecto para una enorme plantación de eucaliptos con el fin de proveer de materia prima a la industria del papel. Lo que el probablemente todavía no ha advertido es que deberá aprender otra lección: que el pueblo tailandés se opondrá duramente a este plan, tal como lo hizo exitosamente en el pasado.

Fuentes: «Thai-Chinese plant needs huge areas for eucalyptus», *Bangkok Post*, 24/8/99; «Land found for China eucalyptus plan» by P. Hongthong, *The Nation*, 8/9/99; «State forest policies are in contradiction», *Bangkok Post*, 13/9/99; «Plantation initiative finds favour» by U. Noikorn and W. Techawongtham, *Bangkok Post*, 15/9/99; «Pressure groups in arms against eucalyptus scheme» by U. Noikorn, 22/9/99.

INDIA

«GACHHA BINA (SIN ARBOLES) JEEVANA NAHI (NO HAY VIDA)»

Ha estallado un conflicto en relación con 400.000 hectáreas de bosques en el estado de Orissa en la India. Actores del mismo son los campesinos que han regenerado esos bosques a partir de tierras degradadas y los funcionarios del gobierno, que consideran que esas tierras pertenecen al estado. Del total del área protegida, 60% corresponde a reservas forestales, en tanto el resto se reparte entre bosques protegidos y bosques de las aldeas.

El manejo sustentable de los bosques por parte de las comunidades locales de la zona comenzó en la década de los sesenta. Actualmente, dos millones de personas pertenecientes a las 10.000 aldeas diseminadas en la región, están luchando por obtener de parte del gobierno sus legítimos derechos sobre dichos bosques. Los campesinos han formado la organización Orissa Jungle Manch (OJM), un foro a nivel del estado, cuyo propósito es forzar al gobierno a reconocer sus derechos territoriales. Las próximas elecciones de la Asamblea Nacional constituyen una buena oportunidad para que los campesinos manifiesten sus reclamos, por lo cual la OJM está presionando a los partidos políticos a efectos de que incluyan en sus plataformas el tema de los derechos comunitarios. Como parte de su estrategia, la OJM ha decidido hacer circular entre los líderes políticos a todo nivel —desde comunitario hasta estadual— una cartilla que contiene sus seis demandas, junto a una nota explicando de que se trata este movimiento. Dichas demandas son:

- Deberá reconocerse a las comunidades sus derechos a la protección y el manejo de los bosques. Ello significa que no podrán designarse funcionarios del Departamento Forestal para actuar en las instituciones actualmente encargadas de la protección de los bosques.
- Deberán reconocerse a las comunidades sus derechos a la recolección, así como al mercadeo y la venta de productos forestales no madereros.
- Derecho al uso domestico de madera proveniente de los bosques protegidos, sin necesidad de permiso por parte de los funcionarios forestales.
- Derecho a la extracción de lena de los bosques de las aldeas y a la venta del excedente.
- Deberá reconocerse a las comunidades que viven en áreas de reserva o protegidas —como parques y santuarios— sus derechos al manejo comunitario y todos los derechos mencionados anteriormente.
- El gobierno deberá hacer un relevamiento de todas las áreas de bosque y asignar zonas a ser protegidas por las propias comunidades.

Ni los movimientos populares para la conservación de los bosques, ni los conflictos sobre la propiedad y el manejo de los recursos naturales son algo nuevo en la India. La lucha de las comunidades locales por los bosques en Orissa data de 1937. Por ejemplo, en Dhenkanal, una de las zonas pioneras en el movimiento comunitario por los bosques en Orissa, tuvo lugar un «prajalemi» (revolución popular) por todos los derechos sobre los recursos forestales y la abolición del impuesto sobre los bosques, seguida de una «kandhalemi» (revolución tribal) con iguales demandas. El movimiento se extendió a otros principados, como Nayagarh, Daspalla y algunas zonas de Sambalpur. Como consecuencia de ello, el rey de entonces decreto una igual distribución de la producción de los bosques entre el gobierno y la comunidad, a la vez que sugirió que se estableciera el manejo conjunto de los recursos. La situación de los pueblos indígenas que viven dentro de los límites y en las proximidades del Parque Nacional Rajiv Gandhi (ver Boletín 20 del WRM), así como la lucha desarrollada por las comunidades pesqueras tradicionales del Lago Chilika en Orissa (ver Boletín 24 del WRM), que recientemente lograron que el gobierno elevara un proyecto de ley que concede derechos absolutos sobre la pesca a las comunidades, constituyen dos ejemplos de conflictos que se vienen dando en la India en relación con los recursos naturales.

Cuando Joginath Sahoo, un maestro de 30 años de edad, que trabaja en una escuela de la aldea de Kesharpur en el distrito Nayagarh de Orissa, entra en su salón de clase sus alumnos lo saludan diciendo: «Gachha bina. (Sin árboles) ...» y el le retribuye el saludo agregando: «jeevana nahi (no hay vida)». Para asegurar la vida de las comunidades locales, los bosques deben estar bajo su directo control.

Fuente: http://www.oneworld.org/cse/html/dte/dte990930/dte_analy.htm setiembre de 1999.

FILIPINAS

UNA COMPAÑÍA MINERA CANADIENSE ACTÚA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Si bien la tala ha sido la mas importante causa directa de deforestación en el archipiélago de Las Filipinas —cuya superficie actual de selva tropical es apenas un 3% de la original— la minería es también relevante en cuanto a efectos depredatorios. Se estima que el 40% del territorio del país ha sido otorgado por el gobierno en régimen de concesión a compañías mineras multinacionales. Como en tantas otras partes del mundo, la minería en gran escala ha producido no sólo impactos ambientales sino también sociales sobre las comunidades locales y los pueblos indígenas de Filipinas (ver Boletín 11 del WRM).

Se ha denunciado recientemente que miembros del pueblo indígena Subanen han padecido violencia a manos de la policía y de funcionarios de la compañía minera canadiense TVI Pacific. El incidente acaeció el día 6 de setiembre pasado, cuando un grupo de alrededor de 50 Subanen bloquearon la carretera de acceso a su territorio ancestral en las montañas de Zamboanga del Norte. Acto seguido fueron atacados por grupos armados y golpeados con palos y con culatas de escopetas.

A pesar de la violencia sufrida los Subanen han continuado bloqueando la carretera, con el fin de evitar que TVI llevara sus equipos de perforación al territorio de 500 hectáreas sobre el que ellos vienen reclamando derechos ancestrales desde 1922. La mina propuesta por TVI generara una profunda cantera en la montaña cubierta de bosque, y el mineral extraído sera procesado con cianuro. Los indígenas, que están siendo apoyados por grupos religiosos y de la sociedad civil, residentes locales —incluso pequeños mineros— y la ONG Survival International, con sede en el Reino Unido, están dispuestos a continuar con estas acciones, dado que han estado sufriendo un continuo proceso de despojo de sus tierras ancestrales —que otrora se extendieron a lo largo de toda la península de Zamboanga— a manos de colonos y madereros.

Hechos de violencia directa e indirecta contra pobladores locales por parte de TVI vienen siendo denunciados desde 1996. Asimismo, la compañía ha sido acusada de violar el Código Minero de 1995, de acuerdo con el cual todas las empresas deben obtener el consentimiento informado de los pueblos indígenas afectados antes de iniciar cualquier nuevo proyecto minero, y también la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas de 1997, que establece el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y el respeto a sus derechos. Ninguna de estas normas ha sido cumplida.

El éxito de la resistencia del pueblo indígena Subanen es considerado muy importante desde el punto de vista estratégico, dado que se teme que si la compañía se las arregla para seguir operando en la zona, similares prácticas abusivas podrán darse en otros lugares del país. TVI ha hecho solicitudes de tierra por una superficie total de 1.180.000 hectáreas en 20 diferentes lugares de Filipinas.

Fuente: Drillbits & Tailings, Volumen 4, Nro. 17, 23/10/99.

LOS POLÍTICOS MADEREROS SE OPONEN A LA VEDA DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL

Hoy en día queda en pie solo el 3% de lo que fue la densa selva tropical de Filipinas. Además, la mayor parte de este reducido porcentaje ocupa pequeños parches e incluso ha sufrido un severo proceso de degradación (ver Boletín 27 del WRM).

El gobierno no ha hecho nada para evitar que se llegara a este estado de cosas. En realidad, ahora está promoviendo una aún mayor destrucción. Recientemente se ha anunciado que una propuesta veda total a la corta de madera no será implementada. Las autoridades argumentan que la prohibición significaría una merma en las entradas del erario público estimada en US\$ 15 millones anuales y que constituiría un factor negativo para la balanza comercial. Antonio Ceriles, Secretario del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo que parte de ese dinero es utilizado para pagar las importaciones de madera, especialmente las provenientes de Malasia. Una veda total probablemente estimularía el madereo ilegal, agregó.

El anuncio generó duras críticas por parte de grupos ambientalistas que justamente están presionando por una veda total. Los mismos aducen que el gobierno tiene una pobre política ambiental, tal como se refleja en el cumplimiento de su programa de reforestación. La misma ha alcanzado tan sólo entre 60.000 y 70.000 hectáreas anuales, mientras que la tasa de deforestación supera en diez veces esa cifra, siendo de 743.000 hectáreas por año. La Organización Filipina de Protectores del Bosque manifestó que las ganancias económicas no pueden compensar ningún tipo de degradación ambiental o social en un futuro próximo. Voceros oficiales también han hecho sentir sus críticas. Horacio Morales, Secretario de la Reforma Agraria, lamentó el hecho de que el gobierno esté haciendo muy poco para proteger los pocos bosques que quedan y pronosticó que, en caso de que se siga con la tala, todos los bosques del país habrán desaparecido para el año 2010. El Comité de Ayuda a las Tierras Altas —una federación de organizaciones no gubernamentales que trabaja con comunidades— considera que la principal razón de la ineptitud del gobierno para implementar la conservación de los bosques es que muchos políticos están involucrados directamente en el negocio de la madera. El propio Ceriles es dueño de una empresa maderera que opera en el sur del país.

La lógica subyacente a la decisión gubernamental es insustentable, tanto del punto de vista económico, como social y ambiental. Se ignora el valor de las selvas como fuente de productos y servicios, así como las negativas consecuencias de su acelerada pérdida. El dinero obtenido a costa de los bosques y de las comunidades locales es a su vez utilizado para promover indirectamente la destrucción de los recursos forestales de los países vecinos. Por último, pero no por ello menos importante: considerar que una veda total de corta promovería la tala ilegal revela la ineficiencia de los controles practicados por quienes



AUSTRALIA

ONG AUSTRALIANAS SE OPONEN A UNA INICIATIVA DE SU GOBIERNO PARA REGULAR UNOS SISTEMAS INDEPENDIENTES DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE BOSQUES

Un nutrido grupo de ONG australianas están haciendo circular a nivel mundial una carta cuyo texto en castellano es el siguiente:

Los abajo firmantes, representantes de ONG conservacionistas australianas, nos dirigimos a Uds. para hacerles conocer nuestra oposición al enfoque adoptado por el Ministro Federal de Bosques y Conservación —Sr. Wilson Tuckey— con vistas a la regulación de los sistemas independientes de certificación de bosques a nivel internacional.

Como Uds. podrán saber, el Ministro Tuckey ha invitado a un número de representantes gubernamentales a un encuentro a realizarse en Nueva York en el mes de noviembre, con el fin de discutir la creación de un mecanismo intergubernamental que regule el funcionamiento de los programas de certificación privados, voluntarios y no gubernamentales. Sin embargo, el Ministro Tuckey ha decidido no invitar a ningún representante no gubernamental, o de hecho a nadie que esté directamente implicado en la operatividad de un programa de certificación. Creemos que este encuentro es de naturaleza totalmente inadecuada.

La completa transparencia así como la consulta y participación significativas de los actores relevantes han sido reconocidas por muchas instituciones, incluyendo al propio Panel Intergubernamental de Bosques, como componentes esenciales para que los modelos de certificación y etiquetado de productos forestales sean creíbles. A pesar de estos criterios ampliamente aceptados, hasta el presente el Gobierno Federal Australiano no se ha aproximado a las ONG para solicitar su apoyo a la iniciativa del Ministro Tuckey. Tampoco se ha informado a la opinión pública del país acerca de tal iniciativa, creemos que debido a que el propio Ministro sabe de su falta de credibilidad.

En parte debido a políticas forestales como las defendidas por el Ministro Tuckey y otros, la certificación se ha vuelto un tema muy controvertido en Australia. Creemos que el Ministro Tuckey puede estar intentando llevar ese nivel de controversias domésticas al plano internacional, al solicitar a otros gobiernos que apoyen su desacertada propuesta. Pensamos que ello supondría una seria divergencia con los rumbos que ha tomado recientemente el debate internacional sobre política forestal y que habrá de generar seguramente una amplia oposición por parte de las ONG.

Por las razones expuestas, les solicitamos respetuosamente que su gobierno no acepte la invitación del Sr. Tuckey al encuentro de Nueva York.

Saludan atte.

Tim Cadman, Native Forest Network; Beth Schultz, Conservation Council of WA; Peter Sims, Tarkine National Coalition; Cam Walker, Friends of the Earth; Harriett Swift, Bega Chipstop; Virginia Young, The Wilderness Society; Rod Anderson, Environment Victoria; John Poppins, Amcor Green Shareholders; Jill Redwood, Concerned Residents of East Gippsland; Peter Robertson, West Australian Forest Alliance; Noel Plum, National Parks Association of New South Wales; Bill Peisley, Project Officer, Rainforest Information Centre; Leonie Van der Maesen, FoE Australia.»

Fuente: Native Forest Network Southern Hemisphere; email: tcadman@nfn.org.au <http://www.nfn.org.au>

HOLANDA

BOSQUES PARA EL FUTURO

Recientemente la ONG holandesa BothENDS ha publicado *Forests for the Future: Local Strategies for Forest Protection, Economic Welfare and Social Justice* (Bosques del Futuro: estrategias locales para la protección de los bosques, el bienestar económico y la justicia social) editado por Paul Wolvekamp, Ann Danaiya Usher, Vijay Paranjpye y Madhu Ramnath.

El libro trata de la cuestión de cómo las comunidades locales e indígenas pueden mantener el equilibrio entre sus respectivas sociedades y ambientes forestales al verse enfrentadas a crecientes presiones externas, aumento de la población e incremento de las demandas para satisfacer necesidades básicas y tener dinero en efectivo.

Las causas de la deforestación se dan generalmente fuera de los bosques. Más que las necesidades de las poblaciones locales y la conservación de los bosques, lo que determina el destino final de los bosques es la demanda mundial de madera, papel y materia prima. Las acciones de los gobiernos y de las empresas para restaurar o manejar los ambientes forestales son a menudo inexistentes o, por lo menos, ineficaces.

No obstante, en el seno de las comunidades que dependen de los bosques, hay frecuentemente un acervo de conocimientos acerca del uso racional de la tierra y de la protección ambiental. Los estudios de caso presentados en la obra provienen de diferentes lugares del mundo ubicados en las zonas tropical, templada y boreal. En los mismos se describen los positivos esfuerzos realizados para consolidar y adaptar los sistemas de manejo forestal local a un ambiente cambiante.

Uno de los aspectos destacados del libro es que quienes colaboraron con él son personas pertenecientes a grupos locales comprometidos en estos esfuerzos. El libro presenta sus experiencias y recomendaciones acerca de cómo restablecer el control de las comunidades sobre los bosques y preservarlos para el futuro.

Cada vez que oigan a alguien decir que «no hay alternativas» al control centralizado por el estado en áreas frágiles de bosque, recurran a este libro. «Ofreciendo el tipo de perspectiva que sólo puede provenir de quienes están comprometidos de cerca con las duras realidades de las luchas locales por los bosques, la obra informa e inspira» comentó Larry Lohmann, coautor de «El papel del Sur» acerca de esta nueva publicación.

L@s interesad@s en adquirirlo pueden dirigirse a:

Mohammed Umar

Zed Books

7 Cynthia Street, London N1 9JF

Tel +44 (0)20 7837 4014 Fax +44(0)20 7833 3960

correo electrónico: sales@zedbooks.demon.co.uk

Fuente. Paul Wolvekamp, c.e.: pw@bothends.org 15/11/99